

No. 39837

**Paraguay
and
Ecuador**

Convention on judicial assistance in criminal matters between the Republic of Paraguay and the Republic of Ecuador. Asunción, 25 August 1997

Entry into force: *8 May 2001 by notification, in accordance with article 16*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Paraguay, 16 January 2004*

**Paraguay
et
Équateur**

Convention relative à l'assistance judiciaire en matière pénale entre la République du Paraguay et la République de l'Équateur. Asunción, 25 août 1997

Entrée en vigueur : *8 mai 2001 par notification, conformément à l'article 16*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Paraguay, 16 janvier 2004*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO
SOBRE
ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL
ENTRE
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Y
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**

La República del Paraguay y la República del Ecuador, en adelante "las Partes",

DESEANDO intensificar su cooperación en el campo de la asistencia judicial en materia penal, con el objeto de asegurar la acción de la justicia,

HAN resuelto celebrar un Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal, sometido a las estipulaciones siguientes:

**TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTICULO 1
OBLIGACIONES DE LA ASISTENCIA**

1. Cada una de las Partes se compromete a prestar a la otra Parte, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio, la más amplia asistencia en el desarrollo de procedimientos judiciales penales. Tal asistencia comprende especialmente:
 - a) La Notificación de citaciones y Resoluciones judiciales;
 - b) El interrogatorio de indiciados, sindicados e imputados de un delito, testigos, o expertos;
 - c) El desenvolvimiento de actividades para la obtención de pruebas;
 - d) El traslado de personas detenidas con fines probatorios con su debida autorización;
 - e) La ejecución de peritaje, decomiso, incautaciones, secuestros, inmovilización de bienes, embargos, identificación o detección del producto de los bienes o los instrumentos de la comisión de un delito, inspecciones o reconocimientos judiciales y registros; y,
 - f) La comunicación de sentencias penales y de los certificados del registro judicial e información en relación a las condenas y los beneficios penitenciarios.

2. La asistencia no comprende la ejecución de penas o condenas.

ARTICULO 2 HECHOS QUE DAN LUGAR A LA ASISTENCIA

1. La asistencia podrá ser prestada aún cuando el hecho por el que procede la Parte requirente no esté previsto como delito por la Parte requerida.
2. Sin embargo, para la ejecución de inspecciones o reconocimientos judiciales y registros, la asistencia será prestada sólo si el hecho por el que se procede en la Parte requirente está previsto como delito también por la ley de la Parte requerida, o bien si resulta que la persona contra quien se procede, ha expresado libremente su consentimiento en forma escrita.

ARTICULO 3 DENEGACIÓN DE LA ASISTENCIA

1. La asistencia será denegada:
 - a) Si las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la ley de la Parte requerida, o son contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de dicha Parte;
 - b) Si el hecho, en relación al que se procede, es considerado por la Parte requerida, delito político o delito militar;
 - c) Si la Parte requerida tiene fundadas razones para suponer que consideraciones relacionadas con la raza, la religión, el sexo, la nacionalidad, el idioma, las opiniones políticas o las condiciones personales o sociales de la persona indiciada, sindicada o imputada del delito pueden influir negativamente en el desarrollo del proceso o en el resultado del mismo;
 - d) Si la persona contra quien se procede en la Parte requirente ya ha sido juzgada por el mismo hecho en la Parte requerida; y,
 - e) Si la Parte requerida considera que la prestación de la asistencia puede ocasionar un perjuicio razonable a su soberanía, a su seguridad o a otros intereses esenciales nacionales.
2. La asistencia puede ser rechazada si la ejecución de las acciones solicitadas interfiere con el procedimiento judicial que se tramita en la Parte requerida, aunque esta última podrá proponer que la ejecución de las acciones solicitadas sea diferida o sometida a condiciones, en cuyo caso la Parte requerida lo debe informar con prontitud a la Parte requirente, indicando los motivos.

**ARTICULO 4
EJECUCIÓN**

1. La autoridad central encargada de coordinar, enviar y recibir la tramitación de las solicitudes de asistencia por la República del Paraguay es el Ministerio de Justicia y Trabajo y por la República del Ecuador es el Ministerio de Gobierno y Justicia.
2. Las autoridades competentes deberán tomar todas las medidas necesarias para satisfacer, a la brevedad posible, las solicitudes conforme al Artículo 1. Las autoridades competentes serán, para la República del Paraguay las autoridades Judiciales y la Fiscalía General del Estado, y para la República del Ecuador la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Fiscal General.
3. Para la ejecución de las acciones solicitadas se observarán las disposiciones legales de la Parte requerida. Sin embargo, ésta procurará respetar las formas y las modalidades expresamente identificadas por la Parte requirente que no sean contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Parte requerida.
4. La Parte requerida informará a la Parte requirente, la fecha y el lugar de la ejecución de las acciones requeridas.

**TITULO II
FORMAS DE ASISTENCIA**

**ARTICULO 5
NOTIFICACIÓN DE ACCIONES**

1. La solicitud que tiene por objeto la notificación de acciones deberá ser debidamente fundamentada y enviada con razonable anticipación respecto a la fecha útil para la misma notificación.
2. La Parte requerida confirmará que se ha efectuado la notificación, mediante el envío de un documento en el que se señale el lugar, la hora y la fecha de la notificación, precisando además, los datos que correspondan a la persona notificada.

**ARTICULO 6
ENVIO DE DOCUMENTOS Y OBJETOS**

1. Cuando la solicitud de asistencia tuviera por objeto el envío de avisos o documentos, la Parte requerida tendrá facultad de remitir copias certificadas de todos los documentos.

2. Los documentos y los avisos originales y los objetos enviados a la Parte requirente serán devueltos a la brevedad posible a la Parte requerida si ésta última así lo solicita.

ARTICULO 7 COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUERIDA

1. Si la Parte requirente solicita la comparecencia de personas para que rindan testimonio en el territorio de la Parte requerida, ésta puede aplicar las medidas coercitivas previstas en su ley para cumplir la diligencia.
2. Sin embargo, cuando se trata de la comparecencia de indiciados, sindicados o imputados, la Parte requirente deberá indicar en la solicitud, las medidas que serían aplicables según su ley y la Parte requerida procederá conforme a su ordenamiento jurídico.

ARTICULO 8 COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUIRENTE

1. Cuando el Estado requirente solicite la comparecencia de una persona en su territorio para prestar testimonio o rendir informe, el Estado requerido invitará al testigo o perito a comparecer en forma voluntaria ante la autoridad competente del Estado requirente y sin utilizar medidas conminatorias o coercitivas. Si se considera necesario, la Autoridad Central del Estado requerido podrá registrar por escrito el consentimiento de la persona a comparecer en el Estado requirente. La autoridad Central del Estado requerido informará con prontitud a la Autoridad Central del Estado requirente de dicha respuesta.
2. La Parte requirente sufragará al testigo y al perito los gastos de viaje y conexos, así como los honorarios de este último.

ARTICULO 9 COMPARECENCIA DE PERSONAS DETENIDAS EN LA PARTE REQUIRENTE

1. Una persona detenida en la Parte requerida, citada a comparecer en la Parte requirente con fines de testimonio, careo o confrontación, reconocimiento o identificación personal, podrá ser transferida provisionalmente al territorio de la Parte requirente bajo las siguientes condiciones:
 - a) Su consentimiento formal;
 - b) Que su detención no sea susceptible de ser prolongada por el traslado; y,

- c) Que la Parte requirente se comprometa a volverla a trasladar tan pronto como desaparezcan las razones de la transferencia y, en todo caso, dentro del plazo fijado por la Parte requerida. Tal plazo puede ser prorrogado por una sola vez, por la Parte requerida por justificados motivos.
2. La comparecencia podrá ser rechazada por la Parte requerida si existieren razones de carácter procesal.
 3. La persona transferida deberá permanecer en calidad de detenida en el territorio de la Parte requirente, a menos que la Parte requerida revocare la detención en dicho lapso, en cuyo caso será puesta en libertad.
 4. La Parte requirente sufragará los gastos de viaje y conexos, ocasionados por la comparecencia de las personas detenidas.

ARTICULO 10 GARANTÍAS

Los comparecientes a diligencias judiciales, tanto en la Parte requirente como en la Parte requerida, gozarán de los derechos y garantías contemplados en sus respectivas legislaciones.

ARTICULO 11 ENVIO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS Y DE CERTIFICADOS DEL ARCHIVO JUDICIAL

1. La Parte requerida, cuando envíe una sentencia penal ejecutoriada proporcionará copia íntegra y certificada de la misma, en la que conste la autorización de la autoridad judicial correspondiente.
2. Los certificados del archivo judicial, necesarios a la autoridad judicial de la Parte requirente para el desarrollo de un procedimiento penal serán enviados a dicha Parte, si en las mismas circunstancias éstos podrían ser otorgados por las autoridades judiciales de la Parte requerida.

ARTICULO 12 INFORMACIONES SOBRE SENTENCIAS

Las Partes intercambiarán información anual de las sentencias penales ejecutoriadas pronunciadas en contra de sus respectivos nacionales.

TITULO III
PROCEDIMIENTOS Y GASTOS

ARTICULO 13
SOLICITUD DE ASISTENCIA

1. La asistencia será prestada a solicitud de la Parte requirente.
2. La solicitud deberá contener las siguientes informaciones:
 - a) La autoridad judicial que interviene y los datos identificatorios de la persona a quien se procesa, así como el hecho y la naturaleza del delito, del procedimiento y las normas aplicables al caso;
 - b) El objeto y el motivo de la solicitud;
 - c) Cualquier otra información necesaria para la ejecución de las acciones requeridas, especialmente la identidad, y si es posible, el lugar donde se encuentra la persona contra quien deben ser ejecutadas las acciones; y,
 - d) Las formas y modalidades especiales requeridas para la ejecución de las acciones, así como los datos identificatorios de las autoridades competentes.
3. La solicitud, en el caso que tenga por objeto la búsqueda y la obtención de pruebas, deberá contener, además, la indicación del objeto y de la finalidad de la acción, así como, si es el caso, el cuestionario a ser formulado.

ARTICULO 14
COMUNICACIONES

Las comunicaciones entre las Partes se efectuarán a través de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 15
GASTOS

Las Partes asumirán los gastos efectuados en la asistencia solicitada en lo que a cada una le corresponde, de acuerdo a lo establecido en este instrumento.

**TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES**

**ARTICULO 16
RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR**

1. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que ambas Partes se comuniquen por escrito, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por sus respectivos ordenamientos constitucionales.
2. El presente Convenio tendrá una duración de cinco años. Su vigencia se prorrogará automáticamente por períodos de cinco años y podrá ser denunciado en cualquier momento por cualquiera de las Partes por comunicación escrita dirigida a la otra Parte. La denuncia tendrá efecto el primer día del sexto mes siguiente a aquel en que la otra Parte haya recibido la respectiva notificación

FIRMADO en la ciudad de Asunción, a los veinte y cinco días del mes de agosto, del año un mil novecientos noventa y siete, en dos ejemplares originales, en idioma español, ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY**

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR**

RUBEN MELGAREJO LANZONI
Ministro de Relaciones Exteriores

JOSE AYALA LASSO
Ministro de Relaciones Exteriores

[TRANSLATION — TRADUCTION]

CONVENTION ON JUDICIAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN
THE REPUBLIC OF PARAGUAY AND THE REPUBLIC OF ECUADOR

The Republic of Paraguay and the Republic of Ecuador, hereinafter referred to as the Parties;

Desiring to intensify their cooperation in the area of judicial assistance in criminal matters, in order to strengthen the role of justice;

Have decided to enter into a Convention on Judicial Assistance in Criminal Matters, under the following terms:

TITLE I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Obligation to Provide Assistance

1. Each of the Parties undertakes to provide to the other Party, in accordance with the provisions of this Convention, the broadest assistance in conducting judicial penal proceedings. That assistance shall include in particular:

- (a) Notification of judicial summonses and decisions;
- (b) Interviewing of suspects, defendants and persons accused of an offence, and witnesses or experts;
- (c) The conduct of activities in gathering evidence;
- (d) The transfer of detained persons for purposes of obtaining evidence, with the necessary authorization;
- (e) The carrying out of expert reports, seizures, confiscations, expropriations, freezing of assets, distraints, identification and detection of the product of assets or the instruments with which an offence has been committed, judicial inspections or examinations and searches;
- (f) The notification of penal sentences and certificates from the judicial register, and information concerning prison sentences and benefits for prisoners.

2. Assistance does not include the execution of penalties or sentences.

Article 2. Situations Giving Rise to Assistance

1. Assistance may be provided even if the act for which proceedings are taking place in the requesting Party is not defined as an offence by the requested Party.

2. However, for the carrying out of judicial inspections or examinations and searches, assistance shall be provided only if the act for which proceedings are taking place in the requesting Party is also defined as an offence in the law of the requested Party, or if the person against whom proceedings are being taken has freely given his or her consent to it in writing.

Article 3. Refusal of Assistance

1. Assistance shall be refused if:

(a) The actions requested are prohibited by the law of the requested Party, or are contrary to the fundamental principles of that Party's legal code;

(b) If the act in relation to which proceedings are being undertaken is considered by the requested party as a political or military offence;

(c) If the requested Party has good reasons to believe that considerations related to race, religion, gender, nationality, language, political views or the personal or social circumstances of the person suspected or accused of, or charged with, the offence may negatively affect the conduct of the legal proceedings or their outcome;

(d) If the person against whom proceedings are being taken in the requesting Party has already been tried for the same act in the requested Party; and

(e) If the requested Party considers that the provision of its assistance can reasonably be expected to harm its sovereignty, security or other vital national interests.

2. Assistance may be refused if the implementation of the actions requested interferes with judicial proceedings being conducted in the requested Party, although the latter may propose that the execution of the requested acts should be postponed or made subject to conditions. In that case, the requested Party shall promptly so inform the requesting Party, indicating the reasons for its decision.

Article 4. Execution

1. The central authority responsible for coordinating, sending and receiving documents relating to requests for assistance shall be, for the Republic of Paraguay, the Ministry of Justice and Labour and for the Republic of Ecuador, the Ministry of Government and Justice.

2. The competent authorities shall take all necessary measures to comply with requests in accordance with article 1. The competent authorities shall be, for the Republic of Paraguay, the judicial authorities and the Office of the Attorney-General, and for the Republic of Ecuador, the Supreme Court and the Ministry of the Attorney-General.

3. For the execution of the requested actions, legal provisions in force in the requested Party shall be observed. However, the latter shall endeavour to comply with such forms and modalities expressly identified by the requesting Party as are not contrary to the fundamental principles of the legal system of the requested Party.

4. The requested Party shall inform the requesting Party of the date and place of execution of the requested actions.

TITLE II. TYPES OF ASSISTANCE

Article 5. Service of Process

1. Requests the object of which is the service of summonses shall be duly founded, and shall be sent reasonably in advance of the due dates for such summonses.
2. The requested Party shall confirm that it has served the summons, by sending a document stating the place, time and date of the summons. It shall also provide the data relating to the person to whom the summons has been served.

Article 6. Sending of Documents and Objects

1. Should the object of the request for assistance be the sending of notices or documents, the requested Party may choose to provide certified copies of all documents.
2. Originals of documents and notices and objects sent to the requesting Party shall be returned as soon as possible to the requested Party if the latter so requests.

Article 7. Appearance of Persons in the Requested State

1. If the requesting Party requests that persons should appear in order to give evidence in the territory of the requested Party, the latter may apply such coercive measures as are provided for in its law in order to carry out the procedure.
2. However, in the case of suspects, defendants and accused persons, the requesting Party shall indicate in its request the measures which would be applied under its law and the requested Party shall proceed in accordance with its legal system.

Article 8. Appearance of Persons in the Requesting Party

1. If the requesting State requests that a person should appear in its territory in order to give evidence or to present a report, the requested State shall, without using comminatory or coercive methods, invite the witness or expert to appear voluntarily before the competent authority of the requesting State. If it is considered necessary, the central authorities of the requested State may record in writing the person's consent to appear in the requesting State. The central authorities of the requested State shall promptly inform the central authorities of the requesting State of that response.
2. The requesting Party shall defray the travel costs and related expenses of the witness or expert, and shall pay his or her fees.

Article 9. Appearance of Detained Persons in the Requesting Party

1. A person detained in the requested Party who has been summoned to appear in the requesting Party for purposes of testimony, confrontation, or personal recognition or identification, may be transferred provisionally to the territory of the requesting Party under the following conditions:

(a) His or her formal consent;

(b) That his or her detention will not be lengthened by the transfer; and

(c) That the requesting Party undertakes to transfer him or her back to the other Party as soon as the reasons for the transfer have ceased to exist and, in any case, within the deadline set by the requested Party. That deadline may be extended only once, by the requested Party, and for good reasons.

2. The appearance may be refused by the requested Party if there are reasons of a legal nature.

3. The person transferred shall remain in the territory of the requesting Party as a detained person, unless during that period the requested Party cancels his or her detention, in which case he or she shall be set free.

4. The requesting Party shall defray the travel costs and related expenses arising out of the appearance of detained persons.

Article 10. Guarantees

In both the requesting Party and the requested Party, persons appearing in judicial proceedings shall enjoy the rights and guarantees provided for in their respective legislation.

Article 11. Sending of Enforceable Judgements and Certificates From the Judicial Archives

1. The requested Party, when sending an enforceable criminal judgement, shall provide a full certified copy of it, showing the authorization of the appropriate judicial authority.

2. Certificates from the judicial archive which are needed by the judicial authority of the requesting Party for the conduct of penal proceedings shall be sent to that Party if, in the same circumstances, such certificates could be provided by the judicial authorities of the requested Party.

Article 12. Information on Sentencing

The Parties shall conduct a yearly exchange of information on enforceable penal sentences pronounced upon their respective nationals.

TITLE III. PROCEDURES AND EXPENSES

Article 13. Requests for Assistance

1. Assistance shall be provided upon application by the requesting Party.

2. The application shall contain the following information:

(a) The judicial authority involved, the identifying data on the person to be put on trial, the act and the nature of the offence, of the proceedings and the rules applicable to the case;

(b) The purpose of and reason for the application;

(c) Any other information necessary for the execution of the requested actions, especially the identity and, if possible, location of the person against whom the actions are to be executed; and

(d) The special forms and modalities requested for the execution of the actions, in addition to the information identifying the competent authorities.

3. The application, if it involves seeking and gathering evidence, shall further indicate the purpose and object of the action, and also, if applicable, the questions to be formulated.

Article 14. Communications

Communications between the Parties shall take place through their respective Ministries of Foreign Affairs.

Article 15. Expenses

The expenses arising out of the requested assistance shall be borne by the corresponding Parties, in accordance with the terms of this instrument.

TITLE IV. FINAL PROVISIONS

Article 16. Ratification and Entry into Force

1. This Convention shall enter into force on the date on which both Parties notify each other in writing, through the diplomatic channel, that the procedures required by their respective constitutional systems have been complied with.

2. This Convention shall remain in force for five years. Its validity shall be automatically extended for five-year periods, and it may be denounced at any time by either of the Parties by notice given in writing to the other Party. The denunciation shall take effect on the first day of the sixth month following that in which the other Party received the written notice.

Done at Asunción, on 25 August 1997, in two originals in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Paraguay:

RUBEN MELGAREJO LANZONI
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Ecuador:

JOSÉ AYALA LASSO
Minister for Foreign Affairs

[TRANSLATION — TRADUCTION]

CONVENTION RELATIVE À L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE
PÉNALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LA RÉPUBLI-
QUE DE L'ÉQUATEUR

La République du Paraguay et la République de l'Équateur, ci-après dénommées les Parties;

Désireuses d'intensifier leur coopération dans le domaine de l'assistance judiciaire en matière pénale afin de renforcer le rôle de la justice;

Décident d'adhérer à la Convention relative à l'assistance judiciaire en matière pénale, en vertu des conditions énoncées ci-après :

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Obligation de fournir une assistance

1. Chacune des Parties s'engage à fournir à l'autre Partie, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'assistance la plus large possible dans la conduite de procédures judiciaires pénales. Cette assistance comprend en particulier :

- a) La notification de citations et de décisions judiciaires;
- b) L'interrogatoire de suspects, d'inculpés et de personnes accusées d'un délit, ainsi que de témoins ou d'experts;
- c) La collecte d'éléments de preuve;
- d) Le transfert de personnes détenues aux fins d'instruction ainsi que l'autorisation nécessaire;
- e) L'exécution de rapports d'experts, de saisies, de confiscations, d'expropriations, de blocage des avoirs, de séquestrations, d'identification et de détection du produit des avoirs ou des instruments avec lesquels un délit a été commis, d'inspections judiciaires ou d'exams et de recherches;
- f) La notification de sentences pénales et de certificats du registre judiciaire et les informations relatives aux peines d'emprisonnement et au traitement des détenus.

2. L'assistance ne comprend pas l'exécution des peines ou des sentences.

Article 2. Situations donnant lieu à une assistance

1. Une assistance peut être fournie même lorsque les faits faisant l'objet de procédures dans la Partie requérante ne sont pas considérés comme étant un délit par la Partie requise.

2. Toutefois, aux fins d'inspections ou d'exams et de recherches judiciaires, une assistance est accordée uniquement lorsque les faits pour lesquels des procédures sont prises dans la Partie requérante sont également considérés comme étant un délit aux termes de la

législation de la Partie requise, ou lorsque la personne visée par les procédures a librement donné par écrit son consentement auxdites procédures.

Article 3. Refus d'assistance

1. L'assistance est refusée lorsque :

a) Les mesures requises sont interdites en vertu de la législation de la Partie requise ou sont contraires aux principes fondamentaux du code pénal de ladite Partie;

b) Les faits faisant l'objet de procédures sont considérés par la Partie requise comme un délit de nature politique ou militaire;

c) La Partie requise a de bonnes raisons de croire que pour des motifs basés sur la race, la religion, le sexe, la langue, les opinions politiques ou la condition personnelle ou sociale du suspect, de l'accusé ou de l'inculpé, le délit peut influencer négativement sur la conduite des procédures pénales ou leur résultat;

d) La personne faisant l'objet des procédures dans la Partie requérante a déjà été jugée pour les mêmes faits dans la Partie requise;

e) La Partie requise estime qu'il est raisonnable de penser que son assistance peut menacer sa souveraineté, sa sécurité ou d'autres intérêts vitaux de son pays.

2. L'assistance peut être refusée lorsque l'application des mesures requises interfère avec des procédures judiciaires en cours dans la Partie requise, et cette dernière peut proposer que l'exécution des actes requis soit reportée ou soumise à certaines conditions. Dans ce cas, la Partie requise en informe rapidement la Partie requérante, indiquant les raisons de sa décision.

Article 4. Exécution

1. L'autorité centrale responsable de la coordination, de l'envoi et de la réception des documents relatifs aux demandes d'assistance est, pour la République du Paraguay, le Ministre de la Justice et de la main-d'oeuvre et pour la République de l'Équateur, le Ministre du gouvernement et de la Justice.

2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour accéder aux demandes conformément à l'article premier. Les autorités compétentes sont, pour la République du Paraguay, les autorités judiciaires et l'Office du Procureur général et, pour la République de l'Équateur, la Cour suprême et le Ministre du Procureur général.

3. En vue de l'exécution des mesures requises, les dispositions juridiques en vigueur dans la Partie requise sont respectées. Toutefois, cette dernière s'efforce de se conformer aux formes et modalités expressément identifiées par la Partie requérante dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux principes fondamentaux du système pénal de la Partie requise.

4. La Partie requise informe la Partie requérante de la date et du lieu de l'exécution des mesures requises.

TITRE II. TYPES D'ASSISTANCE

Article 5. Signification

1. Les demandes faisant l'objet de citations doivent être dûment fondées et transmises suffisamment à l'avance par rapport aux dates d'échéance desdites significations.

2. La Partie requise confirme qu'elle a signifié la citation, en envoyant un document faisant état du lieu, de l'heure et de la date de la citation. Elle fournit également les données relatives à la personne citée à comparaître.

Article 6. Envoi des documents et des objets

1. Lorsque la demande d'assistance consiste en l'envoi d'avis ou de documents, la Partie requérante peut décider de fournir des copies certifiées de tous les documents.

2. Les originaux des documents et des avis et les objets envoyés à la Partie requérante sont retournés le plus tôt possible à la Partie requise si celle-ci en fait la demande.

Article 7. Comparution de personnes dans l'État requis

1. Si la Partie requérante demande que les personnes, dans le but de témoigner, comparaissent dans le territoire de la Partie requise, cette dernière peut appliquer des mesures coercitives conformément à sa législation afin d'exécuter la procédure.

2. Toutefois, dans le cas de suspects, d'inculpés et d'accusés, la Partie requérante indique dans sa demande les mesures qui seront appliquées conformément à sa législation et la Partie requise procède selon son système juridique.

Article 8. Comparution de personnes dans la Partie requérante

1. Lorsque la Partie requérante demande qu'une personne compareisse dans son territoire afin de témoigner ou de présenter un rapport, l'État requis, sans user de méthodes coercitives ou coercitives, invite le témoin ou l'expert à comparaître volontairement devant l'autorité compétente de l'État requérant. S'il est jugé nécessaire, les autorités centrales de l'État requis peuvent consigner par écrit le consentement de la personne à comparaître dans l'État requérant. Les autorités centrales de l'État requis informent rapidement les autorités centrales de l'État requérant de cette réponse.

2. La Partie requérante rembourse les frais de voyage et les dépenses connexes du témoin ou de l'expert, et paie ses honoraires.

Article 9. Comparution de personnes détenues dans la Partie requérante

1. Une personne détenue dans la Partie requise qui a été citée à comparaître dans la Partie requérante aux fins de témoignage, confrontation ou reconnaissance ou identification personnelle, peut être transférée provisoirement dans le territoire de la Partie requérante selon les conditions suivantes :

- a) Obtenir son consentement officiel;
 - b) Sa détention ne doit pas être prolongée en raison du transfert;
 - c) La Partie requérante s'engage à la retourner dans l'autre Partie dès que les raisons du transfert ont cessé d'exister et, dans tous les cas, dans le délai fixé par la Partie requise. Ce délai peut être prolongé une fois seulement par la Partie requise et pour de bonnes raisons.
2. La comparution peut être refusée par la Partie requise pour des motifs de nature juridique.
 3. La personne transférée demeure dans le territoire de la Partie requérante en tant que personne détenue, à moins que, pendant cette période, la Partie requise annule sa détention, auquel cas elle est libérée.
 4. La Partie requérante rembourse les frais de voyage et les dépenses connexes découlant de la comparution de personnes détenues.

Article 10. Garanties

Aussi bien dans la Partie requérante que dans la Partie requise, les personnes comparissant dans des procédures judiciaires jouissent des droits et garanties prévus par leurs législations respectives.

Article 11. Envoi à partir des archives judiciaires de jugements exécutoires et de certificats

1. Lorsqu'elle envoie un jugement pénal exécutoire, la Partie requise fournit une copie certifiée complète de ce dernier, attestant l'autorisation de l'autorité judiciaire appropriée.
2. Les certificats provenant des archives judiciaires et qui sont requis par l'autorité judiciaire de la Partie requérante pour la conduite de procédures pénales sont envoyés à ladite Partie de la même manière que lesdits certificats seraient fournis par les autorités judiciaires de la Partie requise.

Article 12. Information sur le prononcé du jugement

Les Parties procèdent à un échange d'informations annuel sur les sentences pénales exécutoires prononcées contre leurs ressortissants respectifs.

TITRE III. PROCÉDURES ET DÉPENSES

Article 13. Demandes d'assistance

1. L'assistance est accordée sur demande de la Partie requérante.
2. La demande contient les informations suivantes :
 - a) L'autorité judiciaire concernée, les données identifiant la personne poursuivie, les faits et la nature du délit ainsi que les procédures et les règles applicables au cas;
 - b) Le but et la raison de la demande;

c) Toute autre information nécessaire à l'exécution des mesures requises, en particulier l'identité et, si possible, le domicile de la personne faisant l'objet desdites mesures;

d) Les formulaires et modalités particuliers requis pour l'exécution des mesures, en plus de l'information identifiant les autorités compétentes.

3. La demande, si elle implique la recherche et le rassemblement d'éléments de preuve, indique de plus le but et l'objet de la mesure ainsi que les questions à formuler, selon le cas.

Article 14. Communications

Les Parties communiquent entre elles par la voie de leurs Ministères des affaires étrangères respectifs.

Article 15. Dépenses

Les dépenses découlant de la demande d'assistance sont à la charge des Parties correspondantes, conformément aux termes du présent instrument.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 16. Ratification et entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle les deux Parties se sont notifiées par écrit, par la voie diplomatique, que les procédures requises par leurs systèmes constitutionnels respectifs ont été respectées.

2. La présente Convention demeure en vigueur pendant cinq ans. Elle est automatiquement prorogée pour des périodes de cinq ans et peut être dénoncée en tout temps par l'une des Parties sur notification écrite de l'autre Partie. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant lequel l'autre Partie a reçu la notification écrite.

Fait à Asunción, le 25 août 1997, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :

Le Ministre des relations extérieures,

RUBEN MELGAREJO LANZONI

Pour le Gouvernement de la République de l'Équateur :

Le Ministre des relations extérieures,

JOSÉ AYALA LASSO